

## EL PUCHERAZO ELECTORAL EN MÉXICO

Cuando al anochecer del 2 de julio concluyó la votación en las elecciones presidenciales mexicanas de 2006, la atención del país se volcó en las dos principales cadenas de televisión para conocer los resultados de las encuestas a pie de urna. Sorprendentemente, Televisa y TV Azteca anunciaron que no iban a revelar sus cifras. A las once de la noche el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, apareció en las pantallas de todo el país para decir que también él iba a retener el «resultado rápido» de la propia agencia. Pero los «resultados preliminares» del IFE fueron apareciendo en internet, renovándose constantemente durante toda la noche. Según esos datos, el candidato del partido gobernante —el Partido de Acción Nacional (PAN)—, Felipe Calderón, llevaba inicialmente una ventaja de cinco puntos porcentuales, pero con cada renovación de los datos el porcentaje de votos para Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de centro izquierda, iba subiendo progresivamente, mientras que el de Calderón descendía en la misma proporción. A las 1:20 horas la diferencia era del 1,4 por 100; si esa tendencia se hubiera mantenido, López Obrador se habría puesto a la cabeza a las 4 horas. Pero a la mañana siguiente el IFE anunció una ventaja escásima para Calderón, «con el recuento del 98 por 100 de los votos». Ésta era la primera mentira descarada del Instituto Federal Electoral: no había tenido en cuenta más del 8 por 100 de las urnas —3,5 millones de votos— en su recuento del «98 por 100».

Durante los días siguientes comenzaron a conocerse los detalles del fraude. Periodistas, matemáticos, internautas y ciudadanos corrientes examinaron los «resultados preliminares» y hallaron cientos de casos en los que los votos en favor de Calderón habían sido contados dos veces. Las fotografías de las actas oficiales comenzaron a circular por la red, mostrando docenas de discrepancias con los resultados expuestos por el IFE: se habían «afeitado» repetidamente los votos a López Obrador —dos aquí, cuatro allí; en algunos casos se habían perdido hasta cien o doscientos votos—, mientras que el total de Calderón se había «acolchado». El 4 de julio diez urnas, supuestamente vigiladas por las fuerzas armadas, fueron halladas en un vertedero en Ciudad Nezahualcóyotl, un área pobre en las afueras de Ciudad de México; luego se encontraron más votos en otro ba-

surero en Xalapa, Veracruz. Al día siguiente un empleado de la oficina del IFE en Saltillo, Coahuila, dimitió diciendo que su jefe le había obligado a introducir en el ordenador sólo los resultados favorables a Calderón.

El 5 de julio, mientras crecía la indignación popular, todavía no había resultados oficiales. Pese a los informes de los interventores del PRD sobre discrepancias e irregularidades en numerosos colegios electorales, los funcionarios del IFE en cada una de las trescientas oficinas del Instituto repartidas por todo el país insistían en contar los resultados recogidos en las 130.000 actas en lugar de contar los votos reales en las zonas denunciadas. En las urnas en las que permitieron un recuento –menos del 1 por 100–, Calderón perdió más de 113.000 votos de su supuesta ventaja. Extrapolando esa diferencia a escala nacional, López Obrador habría ganado las elecciones por más de un millón de votos: 1.056.900, para ser exactos. El 6 de julio, sin embargo, el presidente del IFE proclamó que Calderón era el ganador oficial por un margen del 0,58 por 100.

El 8 de julio López Obrador convocó una manifestación en Ciudad de México, donde una multitud de más de medio millón de sus seguidores exigió un recuento completo, «voto por voto, casilla por casilla». En la concentración se reprodujo el contenido de una cinta magnetofónica que registraba una conversación telefónica mantenida el 2 de julio entre Elba Esther Gordillo, líder del sindicato notoriamente corrupto de Trabajadores de la Educación (SNTE), y el gobernador del estado septentrional de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, miembro, como ella, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La cinta revelaba que, una vez que quedó claro que el candidato del PRI, Roberto Madrazo, había quedado definitivamente apartado de la carrera presidencial, muchos gobernadores de ese partido, que administró México a sus anchas de 1929 a 2000, habían optado por apoyar al PAN y a la incipiente Nueva Alianza de Gordillo para evitar el triunfo de López Obrador. Se introdujeron votos falsos en las urnas en las que el PRD y otros partidos no tenían interventores, sobre todo en el norte. En los bastiones del PAN en el centro y norte de México los recuentos oficiales en muchas urnas registraban más votos que votantes.

Las cadenas de televisión mexicanas y otros medios de comunicación importantes hicieron oídos sordos a todas esas pruebas de fraude, prefiriendo repetir *ad nauseam* que las elecciones habían sido «las más limpias de la historia de México», eslogan que repetían asimismo los observadores de la UE y la OEA y la prensa internacional. El gobierno de Bush se apresuró a felicitar a Calderón el 7 de julio, esto es, dos meses antes de que el resultado anunciado el día anterior fuera confirmado debidamente por la suprema autoridad electoral mexicana, el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), pero los portavoces de la Casa Blanca retrocedieron rápidamente ante las crecientes movilizaciones populares contra el fraude. Una segunda manifestación convocada por López Obrador el 16 de julio reunió a más de un millón de personas, y se estima que el 30 de julio participaron cerca de dos millones. La plaza central de Ciudad de México, el Zó-

calo, se convirtió en un campamento permanente. Las autoridades del PRD repartieron tiendas y mantas y establecieron un servicio de limpieza, mientras los manifestantes se reunían en una atmósfera que recordaba la de un festival veraniego. López Obrador se aposentó en el Zócalo esperando el resultado de su apelación al TRIFE, al que el 9 de julio había presentado 36 cajas de pruebas exigiendo un recuento completo de todas las urnas, o al menos de las 72.000 en las que se habían constatado irregularidades.

El TRIFE, árbitro último de las elecciones en México, está formado por siete jueces. Fue creado en 1996 como consecuencia de las reformas aprobadas a raíz de las elecciones notoriamente fraudulentas de 1988, que amenazaron la legitimidad ya muy endeble del sistema. Esos jueces, seleccionados por el Tribunal Supremo, tienen un mandato de cuatro años y sus nombramientos –con un salario mensual de 17.000 dólares, más elevado que el del presidente– quedan sujetos a la aprobación del Congreso mexicano, donde los tres principales partidos concedieron una aprobación unánime. El presidente del TRIFE, Leonel Castillo, fue antes juez del Tribunal Supremo y juez federal de carrera; le acompañan seis juristas y antiguos jueces poco conocidos: Berta Alfonsina Navarro, Alejandro Luna, Jesús Orozco, Eloy Fuentes, Fernando Ojesto y Mauro Miguel Reyes Zapata. Las responsabilidades de las autoridades electorales del país se detallan en el artículo 41, apartado 3, de la Constitución mexicana, que estipula que «En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores». En caso de conflicto entre el IFE y el TRIFE, el artículo 99 deja claro que es este último el que tiene la autoridad final: «Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos [...] serán resueltas en única instancia por la Sala Superior [del TRIFE]».

Así pues, son las autoridades electorales las que constitucionalmente deben garantizar la certeza de los resultados electorales y su imparcialidad. Dadas las dudas generalizadas sobre la validez de los resultados hechos públicos el 6 de julio, el TRIFE tenía razones muy fundadas para tomar las medidas necesarias para restaurar la confianza pública en el resultado de las elecciones. Un nuevo recuento era el único medio de establecer la seguridad requerida por la ley. Pedir que se llevara a cabo no sólo entraaba en sus atribuciones, sino que era su deber constitucional.

### *Obstáculos al recuento*

En el propio México, aparte del PRD, eran pocas las fuerzas que pedían un nuevo recuento. Entre ellas estaban el diario pro PRD *La Jornada* y *¡Por esto!*, de Yucatán, mientras que el liberal *Proceso*, el principal semanario del país, denunció enérgicamente la conducta del presidente del IFE, Ugalde, concluyendo que esa institución había sido «un aliado del gobierno federal en su objetivo de evitar, a cualquier precio, la llegada de

Andrés Manuel López Obrador a la presidencia»<sup>1</sup>. El grueso de los medios mexicanos –sobre todo las dos principales cadenas de televisión– repetía que sería logísticamente imposible llevar a cabo el recuento, y también innecesario, dada la limpieza tan pregonada del voto. Los principales medios extranjeros eran más cautos: el 7 de julio *The New York Times* observaba que «hay bastantes problemas para llevar a cabo un recuento total», y el *Financial Times* argumentaba el 8 de julio que «un recuento completo [...] supondría la mejor forma de aliviar las tensiones políticas, asegurando que quienquiera que vaya a ser el nuevo presidente de México no sólo sea legal, sino también legítimo».

El TRIFE pasó brutalmente por encima de tales preocupaciones, ordenando el 5 de agosto un nuevo recuento únicamente en el 9 por 100 de las urnas. Ese proceso, llevado a cabo por jueces entre el 9 y el 13 de agosto en los 300 distritos electorales, no fue en absoluto transparente. A la prensa se le impidió estar presente en el recuento, al que sólo podían asistir representantes de los partidos. A estos últimos únicamente se les permitió poner en duda papeletas específicas, que luego fueron enviadas al TRIFE para su revisión. Pero el TRIFE nunca reveló su dictamen sobre los votos dudosos, ni siquiera un resultado urna por urna. El recuento parcial mostró que de las 11.839 urnas recontadas, en 7.442 de ellas había votos perdidos o por encima del número de votantes potenciales. Si el TRIFE hubiera anulado esas urnas –precedente establecido en su revisión de las anteriores elecciones estatales y municipales–, López Obrador habría sido declarado presidente electo. Pero lo que hizo el TRIFE el 28 de agosto fue anunciar que había anulado 237.736 votos, sin especificar cuáles ni de cuántas urnas provenían. El resultado fue reducir el margen de victoria de Calderón sólo en 4.183 votos.

Tres días después, el presidente Vicente Fox llegó a la sala del Congreso para pronunciar su mensaje anual sobre el estado de la nación. Ocho mil policías antidisturbios rodeaban el edificio, había francotiradores apostados en los tejados vecinos y cañones de agua y verjas de metal a la entrada del Congreso. La policía intentó impedir la entrada a docenas de senadores y diputados del PRD, que sin embargo consiguieron atravesar las líneas policiales y una vez dentro, mientras el senador Carlos Navarrete condenaba la actuación policial, 153 representantes del PRD y del Partido del Trabajo subieron al estrado agitando banderas mexicanas y pancartas que calificaban a Fox de «traidor a la democracia». Fox, que llegó poco después, pasó seis minutos en el recibidor del edificio y prefirió no entrar en el hemisiclio; pronunció su discurso dos horas después desde la biblioteca presidencial.

El 5 de septiembre el TRIFE designó a Calderón presidente electo, y al día siguiente el candidato del PAN se introdujo entre miles de policías antidis-

---

<sup>1</sup> Jesusa CERVANTES y Jenaro VILLAMIL, «Un operativo de Estado», *Proceso* (3 julio 2006).

turbios por la entrada trasera del Tribunal Supremo para recibir su certificado, mientras los manifestantes arrojaban huevos contra la puerta principal. La decisión final del TRIFE eliminaba cualquier posibilidad de un recuento oficial de votos o la anulación de las elecciones. Pese a una petición de la revista *Proceso* y de otras organizaciones, apelando a la ley mexicana de libertad de información para inspeccionar las urnas, el 7 de septiembre el IFE dictaminó que los votos y actas de la votación no eran documentos públicos y que serían quemados en el plazo de quince días, eliminando así las huellas de su colusión con el PAN y el PRI. La abundante documentación sobre el fraude electoral ha deteriorado la confianza pública en los resultados declarados oficialmente. El obvio incumplimiento por el IFE y el TRIFE de su deber constitucional ha raído la delgada capa de legitimidad otorgada a las instituciones «democráticas» del Estado.

### *El espectro de 1988*

Para los mexicanos, los acontecimientos de este verano recordaban inevitablemente otras elecciones robadas hace dieciocho años. En julio de 1988 Cuauhtémoc Cárdenas –hijo del presidente populista Lázaro Cárdenas (1934-1940), que promulgó una reforma agraria y nacionalizó el petróleo– compitió por la presidencia contra el candidato del PRI Carlos Salinas de Gortari. Cárdenas y sus apoyos reformistas de izquierda dentro del partido habían roto con el PRI en 1987, renunciando a reformar la máquina *priísta* desde dentro. Junto con el ex presidente del PRI Porfirio Muñoz Ledo y un conjunto de pequeños partidos de izquierda, Cárdenas fundó a principios de 1988 el Frente Democrático Nacional (FDN) para participar en las elecciones de aquel año. Cuando llegaron las copias de las actas tomadas por los interventores del FDN aquel 6 de julio, se pudo comprobar que Cárdenas iba en cabeza: el 55 por 100 de esas actas mostraba una ventaja para Cárdenas del 40 por 100, frente al 36 por 100 para Salinas; los resultados del gobierno mostraban resultados similares. Pero entonces se produjo el acontecimiento que ha determinado la respuesta popular frente a la actual crisis electoral: el ministro del Interior del PRI anunció en la televisión nacional que el ordenador que contaba los votos se había estropeado. Cuando el sistema volvió a ponerse en marcha más tarde, aquella misma noche, Salinas iba por delante.

Millones de personas salieron a las calles para protestar contra el fraude. El régimen del PRI se negó en redondo a hacer públicas las actas de las urnas restantes, pero cuando se hallaron 30.000 papeletas marcadas con el nombre de Cárdenas en los ríos y bosques del estado meridional de Guerrero, la cólera popular estalló. Durante una manifestación en el Zócalo a la que asistieron más de tres millones de personas, algunos de los ayudantes de Cárdenas le presionaron para apoderarse del Palacio Nacional; pero él se echó atrás frente a una iniciativa tan radical, optando por negociar con Salinas en privado. A cambio de algunas concesiones, incluida la formación en 1990 del Instituto Federal Electoral, Cárdenas re-

nunció a impugnar los resultados, provocando amargas divisiones en el seno del FDN que siguen atormentando al partido que se formó a partir de sus restos desmoralizados en 1989, el PRD.

La presidencia de Salinas de 1988 a 1994, lastrada por la ilegitimidad de su elección, representó el nadir del podrido régimen monopartidista del PRI. La privatización de los bancos, las telecomunicaciones, los transportes, los medios de comunicación y otros sectores hasta entonces públicos llevada a cabo por su gobierno puso vastas franjas del patrimonio de la nación en manos de una nueva capa de empresarios y políticos venales. El nivel de pobreza permanecía en el 36 por 100 en 1994, llegando al 47 por 100 en algunas áreas rurales<sup>2</sup>. Proliferó la corrupción, mientras la desregulación de las finanzas ofreció amplias oportunidades para el blanqueo de dinero a los traficantes de drogas, cada vez más poderosos: policías, políticos, oficiales del ejército y banqueros eran comprados con maletas de dinero en efectivo. La puesta en práctica selectiva de la «guerra contra las drogas» impuesta por Estados Unidos sólo sirvió para fortalecer a algunas facciones criminales a expensas de otras, conduciendo a una escalada de violentas guerras por el territorio entre los traficantes y al debilitamiento de la seguridad pública en todo el país.

Por encima de todo esto sobrevolaba el propio Salinas, de cuya familia se dice que se embolsó hasta catorce millardos de dólares de los fondos del Estado y que huyó del país cuando concluyó su mandato en 1994, temiendo ser sometido a juicio. Su hermano Raúl fue encarcelado en 1995 en relación con el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, hermano del hombre nombrado para investigar el asesinato en 1994 del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio; corrieron abundantes rumores sobre la participación del propio presidente en ambos acontecimientos. Su legado económico fue desastroso: la vulnerabilidad del país frente a los flujos especulativos de capital, junto con la corrupción incontrolada y un derroche de gasto público en 1994 destinado a apuntalar las expectativas electorales del PRI, culminaron en la crisis del peso en diciembre de 1994 y en una devaluación en la que el tipo de cambio se hundió de 3,4 a 7,2 pesos por 1 dólar, arruinando a millones de mexicanos. El gobierno entrante del tecnócrata librecambista Ernesto Zedillo, rescatado por el gobierno de Clinton y el FMI, que contribuyeron con 20 y 17 millardos de dólares respectivamente a sanear sus cuentas, mantuvo la trayectoria neoliberal emprendida por Salinas. Aunque a finales de la década de 1990 comenzó a perfilarse cierta recuperación económica, las condiciones subyacentes creadas por el *salinismo* seguían en pie.

La piedra angular de la presidencia de Salinas fue el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN) con Estados Unidos y Canadá, firmado en 1993. Ese tratado eliminaba los aranceles sobre un amplio aba-

---

<sup>2</sup> Datos procedentes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe*, 2001.

nico de productos estadounidenses y abrió el mercado mexicano a los productos, la propiedad y en particular los agronegocios extranjeros, hundiendo a los pequeños campesinos mexicanos incapaces de competir con los cultivos estadounidenses, muy subvencionados. Aumentó el éxodo desde las áreas rurales, no sólo hacia Estados Unidos, sino también hacia Ciudad de México y el área metropolitana circundante, la costa caribeña de Quintana Roo y otros lugares donde la gente se podía ganar la vida en la construcción o el comercio de subsistencia en la economía informal. En las regiones fronterizas del norte, dos millones de desempleados encontraron un trabajo precario y mal pagado en las *maquiladoras*, donde las corporaciones transnacionales se aprovechaban de las laxas disposiciones laborales del ALCAN y del clima de impunidad empresarial.

Las consecuencias políticas de las presidencias de Salinas y Zedillo fueron una nueva fragmentación del apoyo al PRI, tanto desde la izquierda como desde la derecha. El PAN, tradicionalmente católico y conservador, enemigo del PRI por su anticlericalismo desde su fundación a finales de la década de 1930, había modernizado su imagen y extendido su base desde los estados predominantemente rurales del norte y la región agrícola del centro de México conocida como el Bajío. Dado el desencanto público generalizado con Cárdenas y el PRD por no responder al fraude de 1988, el PAN aparecía como la única oposición electoral viable y resuelta al PRI. El PRD entró en un eclipse parcial; no volvió a ganar ni un solo gobierno estatal hasta 1997. El propio Cárdenas no sacó la conclusión obvia e insistió en presentarse como candidato del PRD en 1994 y de nuevo en 2000, obteniendo en ambas ocasiones sólo el 17 por 100 de los votos. El PRD también sufrió una represión a gran escala a manos del Estado: durante el gobierno de Salinas, más de seiscientos dirigentes locales del PRD fueron asesinados, una media de dos a la semana. Frente a este lúgubre telón de fondo, el 1 de enero de 1994 —el día en que entró en vigor el ALCAN— apareció una nueva fuerza en la escena política mexicana: la rebelión de los zapatistas en Chiapas atrajo de nuevo la atención de la nación hacia la prolongada marginación de la población indígena del país y los pronunciamientos lírico-sardónicos del portavoz del movimiento, el subcomandante Marcos, pronto se propagaron mucho más allá de las fronteras de México.

### *El hombre de Tabasco*

El fraude electoral de 1988 constituyó también un momento decisivo en la carrera política de López Obrador. Nacido en 1953 en el estado tropical, pantanoso y rico en petróleo de Tabasco, en el golfo de México, sus padres, tenderos, se mudaron varias veces durante su infancia, parte de la cual pasó en Palenque, en el estado de Chiapas, famoso por sus ruinas mayas. Todavía adolescente editó un periódico, *El Chol*, por el nombre del pueblo indígena originario de la región. Después de estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, regresó a Tabasco en 1976 como organizador de la campaña del candidato del PRI para el Senado, el poeta Carlos

Pellicer. Fue recompensado con la dirección del pequeño Instituto Indigenista de Tabasco, un puesto político desde el que comenzó a ascender en las filas del PRI hasta obtener un puesto en el escalafón federal, la Dirección de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor, en 1984.

Pero en 1988 López Obrador se unió a la escisión del PRI protagonizada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y otros, que culminó en la creación del FDN. En agosto de aquel mismo año –un mes después de la victoria fraudulenta del PRI– regresó a Tabasco para competir en las elecciones a gobernador en la lista del FDN. Animado por su éxito a escala nacional, el PRI pensó que podía repetir sus tácticas fraudulentas estado por estado y el recuento oficial en Tabasco dejó fuera a López Obrador. Su respuesta fue publicar un libro que documentaba el fraude electoral del PRI<sup>3</sup>. Cuando las elecciones municipales en Tabasco fueron también amañadas en 1991, López Obrador –para entonces presidente de la sección del PRD en el estado– encabezó una larga marcha de protesta hasta Ciudad de México, sin conseguir, empero, alterar el resultado. Se volvió a presentar para gobernador del estado en 1994 y fue oficialmente vencido por Roberto Madrazo, del PRI, que iba a terminar tercero, a mucha distancia, en las presidenciales de 2006. López Obrador, armado con los recibos que demostraban que el PRI había excedido –en cincuenta veces– los límites legales de gasto en la campaña, con un total de más de 74 millones de dólares, y enarbolando el lema «Corazón tropical, mente fría», encabezó otra marcha a Ciudad de México, pero una vez más las autoridades electorales se negaron a ceder<sup>4</sup>.

El apoyo a los derechos de los indígenas desempeñó un papel clave en la consolidación de López Obrador como figura política nacional. En noviembre de 1994, tras la derrota del PRD, acompañó a Cárdenas a la Selva Lacandona de Chiapas para reunirse con Marcos, quien les devolvió el favor calificando a Cárdenas de «interlocutor legítimo» en cuanto a los derechos de los indígenas a escala nacional. En febrero de 1995 el EZLN y Cárdenas se unieron en un llamamiento para formar un Movimiento de Liberación Nacional (MLN). A principios de 1996 López Obrador dirigió una ocupación durante cuatro semanas de los campos petroleros de Tabasco por los campesinos indígenas chontales como protesta contra los daños al medio ambiente. Tropas federales aplastaron la protesta y las imágenes de López Obrador empapado en su propia sangre fueron difundidas por la televisión nacional, mientras el gobierno de Zedillo emitía una orden de detención. Al presentar su candidatura para la presidencia nacional del PRD aquel mismo año, que obtuvo frente a dos líderes del partido con mayor reputación, le dijo a *La Jornada*: «Nunca traicionaremos al movimiento indígena». También en 1996, el 16 de febrero, el movimiento indígena obtuvo una gran victoria cuando, tras largas negociaciones con el gobierno del PRI –representado por Manuel Camacho Solís, que se iba a convertir en ase-

---

<sup>3</sup> Andrés Manuel LÓPEZ OBRADOR, *Tabasco: Víctima del fraude electoral*, Ciudad de México, 1990.

<sup>4</sup> Andrés Manuel LÓPEZ OBRADOR, *Entre la historia y la esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco*, Ciudad de México, 1995.



sor de López Obrador en 2006–, el EZLN y Zedillo firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, en los que el gobierno se comprometía a modificar la Constitución reconociendo derechos autónomos a los 62 pueblos indígenas de México, así como las formas indígenas de justicia y administración y otras tradiciones comunales. Pero esos Acuerdos languidecieron durante cinco años en el limbo del Congreso y fueron finalmente torpedeados por los legisladores.

Una vez alcanzada la presidencia del PRD, López Obrador pasó inmediatamente al ataque, denunciando una serie de delitos financieros facilitados por la creación en 1990 del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). Los bancos prestaban dinero a hombres de paja y empresas ficticias y los créditos impagados debían ser devueltos a los bancos por el Estado. Tales estafas sumaban cientos de millardos de dólares, exactamente 552.000 millones de dólares, según el Banco de México, y en 1998 los legisladores del PRI y el PAN aprobaron un rescate bancario que convirtió en deuda pública dicho pasivo, absorbiendo desde entonces el 15 por 100 del presupuesto federal anual. López Obrador encabezó varias manifestaciones contra esa operación y reunió cientos de documentos que acreditaban el fraude, publicándolos en forma de libro<sup>5</sup>. En declaraciones públicas señaló por su nombre a los delincuentes: poderosas organizaciones como Banamex (el antiguo Banco Nacional de México, ahora parte del Citigroup), TV Azteca y sus propietarios.

También aumentó su fama de ganar elecciones. Desde un principio, el PRD consistía en un conjunto de facciones enfrentadas, y las divisiones evidentes en su nacimiento –en particular entre Cárdenas y Muñoz Ledo, sobre el ascenso y caída del primero en 1988– siguieron siendo una fuente constante de tensiones. Además, sumándose a los conflictos ideológicos, había una marea creciente de oportunismo: el núcleo del PRD siempre ha estado formado por disidentes del PRI, unos procedentes de la escisión inicial de 1988, otros en una lenta transmigración que se prolongó durante años, siempre que parecía que las oportunidades electorales mejorarían cambiando de opción. Como presidente del partido, López Obrador consiguió mantener el control de la lucha entre facciones y en las elecciones al Congreso de julio de 1997 el PRD se convirtió en el segundo bloque de la LVII legislatura, tras el PRI. Una alianza con el PAN y otros partidos más pequeños permitió que Muñoz Ledo se convirtiera en el primer presidente del Congreso no perteneciente al PRI en la historia de México. Al mismo tiempo, la primera contienda electoral por el puesto de gobernador del distrito federal de Ciudad de México –que antes era nombrado por el presidente de la República– fue ganada por Cárdenas.

Bajo el liderazgo de López Obrador, hasta abril de 1999, el PRD también se hizo con la presidencia de los estados de Zacatecas, Aguascalientes y Baja

---

<sup>5</sup> Andrés Manuel LÓPEZ OBRADOR, *Fobaproa, expediente abierto: reseña y archivo*, Ciudad de México, 1999.

California Sur, y habría podido obtener asimismo la de Guerrero en febrero de 1999 de no haber sido por un nuevo fraude del PRI. Un nuevo «éxodo por la democracia» de 20.000 personas, con López Obrador al frente, caminó hasta Ciudad de México desde la capital del estado, Chilpancingo, y llegó al Zócalo justo cuando los trabajadores del sector eléctrico y de otros sindicatos se manifestaban contra la privatización del sector eléctrico. Delegados zapatistas enmascarados se dirigieron también a la multitud, mientras seis mil cuadros zapatistas recorrían los municipios de todo el país, y parecía como si todas las fuerzas de la izquierda –parlamentarias, sindicales e indígenas– se estuvieran agrupando en una sola fuerza capaz de alzarse como alternativa real para las elecciones presidenciales de 2000.

### *El foxismo*

El tema principal de la campaña 2000 fue la rebelión contra el PRI. Dado que el PAN parecía mejor situado para llegar a la presidencia, los antiguos aliados de Cárdenas propugnaron un «voto útil» para echar al partido que había gobernado el país desde 1929. Muñoz Ledo, que se presentó como candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se negó a apoyar al candidato del PAN, Vicente Fox, antiguo ejecutivo de Coca-Cola que había adquirido cierta reputación de opositor combativo enfrentándose al sistema del PRI en 1991, cuando organizó bloqueos de las autopistas y ocupó edificios gubernamentales en Guanajuato en protesta por el fraude electoral del PRI que le había arrebatado la gobernación del estado; cuatro años después volvió a presentarse y esta vez fue debidamente elegido como gobernador de Guanajuato. Obtuvo la nominación del PAN en 2000, venciendo la resistencia de los magnates católicos del partido y de la derecha religiosa, formando su propio grupo de campaña, Amigos de Fox, independiente de la jerarquía tradicional del PAN, y cultivando una imagen desideologizada mediante la incorporación como asesores de antiguos compañeros de Cárdenas como Jorge Castañeda y el fallecido Adolfo Aguilar Zinser. El voto contra el PRI se consideraba un voto contra la corrupción, la pobreza, el desempleo y la quiebra social. Dos tercios de los mexicanos se declararon a favor de un «cambio» en la política económica y social. Por primera vez, importantes fuerzas estadounidenses respaldaron a un candidato anti PRI y Fox encontró apoyo en Washington, donde los abusos y la corrupción del PRI se habían llegado a convertir en un apuro para sus antiguos aliados. El asesor político tejano Rob Allyn, cercano a los sectores petrolero y eléctrico que pretendían introducirse en el sector homólogo –nacionalizado– mexicano, le ayudó a diseñar su estrategia de campaña, y también le llegaron millones de dólares blanqueados. Bajo la bandera de la democratización, Fox pudo barrer al odiado PRI para ponerse al frente de un capitalismo aún más salvaje.

En el PRD eran muchos los que querían que López Obrador fuera el candidato de su partido para la presidencia en 2000; pero Cárdenas, pese a sus pobres resultados en 1994, seguía teniendo mucho predicamento. Su estilo aburrido contrastaba mucho con la retórica insolente de Fox y Cárdenas que-

dó en tercer lugar. El apoyo al PRD cayó del 26 por 100 en 1997 al 17 por 100 en 2000, perdiendo unos 2 millones de votos que se pasaron tácticamente al PAN. Pero la «victoria histórica» de Fox al apartar de la presidencia al partido que había gobernado México durante tantas décadas perdió pronto su brillo. Los cambios esperados no tuvieron lugar y pronto cundió la desilusión. El PRI seguía constituyendo el grupo más numeroso en el Congreso. Muchas de las reformas en pro del libre mercado de Fox se vieron bloqueadas debido a la oposición popular y del Congreso. La economía permanecía estancada y el prometido aumento del empleo no se materializó, debido en parte a la austeridad presupuestaria de Fox. A principios de 2001 se produjo un punto de inflexión, cuando la gira en autobús de los zapatistas por el sur y el centro del país, exigiendo el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, culminó en un discurso de la comandante Esther, enmascarada, ante una sesión conjunta del Congreso retransmitida por la televisión nacional. Sin embargo, en lugar de aceptar las demandas indígenas de que se cumplieran los Acuerdos, el Congreso los vació de cualquier disposición que interfiriera con los intereses empresariales o del Estado. Parlamentarios clave del PRD apoyaron la desnaturalización de los Acuerdos –como fue el caso de Lázaro Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc– o, como ocurrió con el director de la campaña de López Obrador en 2006, Jesús Ortega, se abstuvieron. Los zapatistas rompieron sus relaciones con todos los partidos políticos, lamentando sobre todo la traición del PRD, y pasaron los años siguientes en el monte, construyendo sus propios ayuntamientos autónomos.

### *La gestión de la capital*

López Obrador, entretanto, obtuvo el puesto de gobernador del distrito federal en las elecciones de 2000, pese a los intentos del PRI y el PAN de bloquear su candidatura en los tribunales, pretendiendo que, como *tabasqueño* que era, no satisfacía la exigencia de residencia, a pesar de que hasta tres años antes la capital había sido gobernada con frecuencia por foráneos del PRI. Como gobernador de Ciudad de México, López Obrador combinó proyectos infraestructurales pretenciosos con una actividad policial notablemente dura y una serie de medidas populistas que le ganaron el apoyo de muchos de los pobres de la ciudad. Sus programas sociales, que garantizaban subsidios mensuales de 700 pesos (60 dólares) a los ancianos, minusválidos y madres solas, contrastaban con el endurecimiento del presupuesto federal por parte de Fox, que sólo servía para aumentar las desigualdades existentes. Al mismo tiempo, el encarecimiento del centro histórico de la ciudad beneficiaba principalmente a los propietarios de bienes inmuebles, en particular al magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim, el hombre más rico de México y de América Latina. Eran sobre todo las capas más ricas las que más se beneficiaban del mayor proyecto infraestructural de López Obrador: autopistas elevadas que conectaban los barrios ricos con el aeropuerto y entre sí, mientras que los que iban y venían por debajo desde o hacia las zonas obreras permanecían empantanados en atascos de tráfico. La respuesta del gobernador a los temores de la elite con respecto a la seguridad fue contratar como

asesor al antiguo alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, vinculando las fuerzas de policía de Ciudad de México con la infame política de «tolerancia cero» de éste. Gran parte de la actividad de López Obrador en la capital estaba dirigida a su apuesta presidencial en 2006, para la que las encuestas de opinión lo situaban en buena posición. La capital fue gestionada con vistas a su campaña presidencial de 2006. Comenzó a celebrar conferencias de prensa a las 6:30 horas, con lo que fijaba la agenda de noticias no sólo para la capital, sino para el conjunto del país. Tras las victorias de Kirchner y Lula en 2001 y 2002, la derrota del golpe contra Chávez en Venezuela y el derrocamiento de los gobiernos proestadounidenses de Bolivia y Ecuador, parecía que la ola continental de revuelta en América Latina podría pronto lamer las orillas del Río Grande.

Se podría decir que el disparo de salida de las elecciones presidenciales 2006 tuvo lugar en abril de 2005, cuando, al saberse que López Obrador llevaba una ventaja de dos dígitos sobre sus rivales más próximos, parte de las elites políticas y empresariales de México, el PAN y el PRI se aliaron en un intento de evitar que pudiera presentarse a las elecciones. El pretexto fue una disputa sobre un camino de entrada a un hospital en Ciudad de México y un requerimiento judicial de interrumpir las obras, recurrido por la autoridad gubernativa de la ciudad mientras sus excavadoras seguían trabajando. El fiscal general de Fox, Rafael Macedo de la Concha, presentó una acusación de desacato contra López Obrador y el gobierno de la ciudad, y el Congreso le retiró el derecho a ejercer un puesto representativo —o a presentarse como candidato—, una medida preventiva conocida como *desafuero*. Aunque no había sido condenado por ningún delito, ni acusado de nada más que de una falta administrativa, el candidato presidencial favorito parecía haber sido apartado de la carrera.

López Obrador organizó protestas a gran escala en las calles de la capital. La flagrante finalidad política del desafuero irritó a muchos fuera del PRD: un movimiento juvenil independiente, liderado por el columnista de *La Jornada* Jaime Avilés, repartió incontables panfletos, mientras que el subcomandante Marcos calificaba como golpe de Estado el desafuero. Los periódicos extranjeros publicaron editoriales pidiendo respeto a la «endebles democracia» mexicana, y las protestas seguían a Fox donde quiera que fuera. Bajo la presión de las continuas movilizaciones, el presidente despidió finalmente a su fiscal general en mayo de 2005 y levantó todas las acusaciones contra López Obrador. Era la segunda vez en cinco años que la elite política mexicana había tratado de impedirle competir en las elecciones y había fracasado.

### *La campaña de López Obrador*

Sin embargo, la elite empresarial mexicana tenía poco que temer de una presidencia de López Obrador. Su programa combinaba la promesa de estabilidad macroeconómica, una política monetaria «disciplinada» y el respeto a la autonomía del Banco de México, el banco central, con compro-

misos (no cuantificados) de combatir la pobreza, elevar el salario mínimo y «modernizar sin privatizar» los sectores del gas y petróleo. Al aproximarse el momento de las elecciones, sus estrategias trataron de tranquilizar a los inversores asegurando que se mantendría la disciplina presupuestaria, la inflación seguiría controlada, y lo mismo sucedería con el gasto público<sup>6</sup>. Las agencias de Bolsa publicaban regularmente declaraciones que indicaban que no veían ninguna amenaza. El ejemplo de Lula, inicialmente más a la izquierda de lo que López Obrador hubiera estado nunca, mostraba la ventaja de que fuera un «hombre del pueblo» el que llevara a cabo las reformas que convenían al capital, al mismo tiempo que se desactivaba la cólera de los trabajadores y los pobres. López Obrador podía cumplir una función similar: desmantelando ciertos monopolios mexicanos, podría desbloquear la vía para el acceso del capital extranjero, al tiempo que amortiguaba las protestas del movimiento obrero.

La base de poder desde la que López Obrador inició su carrera hacia la presidencia en 2006 fue la que había establecido meticulosamente en Ciudad de México. Su principal asesor táctico era Manuel Camacho Solís, antiguo gobernador *priísta* de Ciudad de México que negoció en nombre de Salinas en Chiapas y que rompió con el PRI tras no conseguir la nominación como candidato presidencial en 1994. Camacho desempeñó probablemente un papel muy destacado en el reclutamiento de otros *priístas* para la causa, entre ellos Arturo Núñez, antiguo presidente del Congreso; Muñoz Ledo es también un miembro clave de la comitiva. De su plataforma electoral en cincuenta puntos, aquel en el que más insistía López Obrador era el de las exenciones de impuestos y los créditos estatales para todos aquellos que ganaran menos de 9.000 pesos (800 dólares) al mes, lo que suponía casi exactamente la mitad de la población. También prometió cumplir los Acuerdos de San Andrés sobre los derechos indígenas, aunque esto, en la práctica, habría requerido la ratificación por el Congreso. Pero el candidato del PRD no se esforzó demasiado por ampliar su base de apoyo, quizá creyéndolo innecesario: en una encuesta tras otra, sus resultados estaban muy por encima de los de Roberto Madrazo, su viejo rival de Tabasco y ahora candidato del PRI, y también, aunque con menor ventaja, de los del sucesor nombrado a dedo de Fox, el opaco ministro del Interior Santiago Creel Miranda.

### *La operación Calderón*

Pocos prestaron atención al rival de Creel en el proceso de elección de candidato en el PAN, Felipe Calderón, un tecnócrata de 44 años y antiguo secretario de Energía, relativamente poco conocido fuera de su estado natal de Michoacán. Calderón, hijo de uno de los fundadores del PAN, proviene de la vieja guardia católica del partido. Como secretario de Energía de Fox había ido subcontratando poco a poco las actividades de la compañía petrolera estatal, PE-

---

<sup>6</sup> Entrevista con Rogelio Ramírez de la O, *Financial Times* (4 abril 2006).

MEX, que podían eludir por medios burocráticos la oposición del Congreso, desmembrando tranquilamente la gallina de los huevos de oro nacional de modo paulatino<sup>7</sup>. El reducido equipo de campaña de Calderón incluía a su mujer Margarita Zavala –diputada por el PAN– y a su cuñado Diego Hildebrando Zavala, gran accionista de la compañía informática Hildebrando, receptora de muchos contratos federales, entre ellos uno muy especial con el IFE. Calderón fue también uno de los pocos políticos de relieve nacional invitados a la boda del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, en 2003. *Proceso* informó el 29 de abril de que el asesor político de Fox Rob Allyn lo era también de la campaña de Calderón, sugiriendo que éste podría servir como caballo de Troya para las firmas petroleras estadounidenses que pretendían apoderarse de una parte al menos de PEMEX<sup>8</sup>. Pero cuando el PAN realizó su *consulta* –una especie de primarias– a principios de 2006, Calderón consiguió superar a Creel y asegurarse la nominación del partido. El PAN cerró filas y concentró su potencia de fuego sobre López Obrador.

La plataforma de Calderón puso sordina a la perspectiva de abrir el sector de la energía y prometió en su lugar que sería «el presidente del empleo» y que mantendría una «mano firme» contra el crimen. Al igual que Fox, Calderón también pretendió obtener un acuerdo con Estados Unidos sobre la inmigración. Pero en lo que concentró realmente sus esfuerzos fue en presentar a López Obrador como un «Chávez mexicano». Una campaña de anuncios de varios millones de dólares lo calificaba como un «peligro para México» que desencadenaría la revolución social y caería en el autoritarismo. El historial de López Obrador al frente de protestas populares, su aparente falta de interés por el enriquecimiento propio y su modo de vida espartano dejaban a las claras su propensión mesiánica, según el intelectual oficial Enrique Krauze<sup>9</sup>. Desde Estados Unidos llegaban simultáneamente ataques parecidos: el 3 de abril Dick Morris publicó una columna en *The New York Post* titulada «Amenaza en México», en la que afirmaba que

durante meses se han oído abundantes rumores de que la campaña de López Obrador está recibiendo importantes fondos del presidente venezolano Hugo Chávez [...] Chávez es un firme aliado de Fidel Castro. López Obrador podría ser la pieza final de su gran plan de poner a Estados Unidos de rodillas ante la renacida izquierda latinoamericana.

Ese tipo de campaña negativa de estilo estadounidense era nuevo en las contiendas presidenciales mexicanas y sorprendió a muchos. La intensidad de la campaña en los medios de comunicación contra el favorito era notable: las

---

<sup>7</sup> A principios de 2003, cuando el presidente Chávez tuvo que afrontar el cierre de una parte de la industria petrolera venezolana, Fox le preguntó, al parecer, si podía ayudarle de algún modo. Chaves inquirió si México podría prestar a Venezuela algún superpetrolero, y Fox, según los informes de prensa, se excusó explicando que México había prestado todos sus tanques a empresas privadas. Esto formaba parte del legado de Calderón como secretario de Energía.

<sup>8</sup> José GIL OLMOs, «Estrategas mercenarios... Sin rival», *Proceso* (29 abril 2006).

<sup>9</sup> Enrique KRAUZE, «El mesías tropical», *Letras libres* (junio 2006).

principales cadenas de televisión y la mayoría de los periódicos la emprendieron contra López Obrador. La cobertura de la campaña presidencial por la televisión –que nunca había sido particularmente equilibrada– se inclinó ahora decisivamente por Calderón, tras la aprobación en marzo de 2006 de la ley conocida como «Ley Televisa». Esa ley favorecía abrumadoramente a los dos principales conglomerados de los medios, abriendo las ondas al mejor postor y exigiendo que las nuevas empresas cumplieran requisitos burocráticos que no se aplicarían a Televisa ni a TV Azteca. Se aprobó unánimemente –sin debate, en un lapso increíble de siete minutos– en la Cámara Baja del Parlamento, ya que los tres principales partidos trataban de ganarse el favor de los medios de comunicación; también la aprobó el Senado, pese a que allí se opusieran el PRD y algunos senadores rebeldes del PRI.

López Obrador, con una ventaja al parecer inmovible en las encuestas de opinión, no respondió en un primer momento a esos ataques. También rehuyó el primer debate presidencial televisado del 25 de abril, suscitando acusaciones de arrogancia. A primeros de mayo comenzaron a aparecer en la prensa encuestas que pretendían mostrar que Calderón acortaba distancias con López Obrador o incluso se situaba por delante, aunque muchas de las organizaciones que suministraban los datos de esas encuestas eran hasta entonces desconocidas, y es bien sabido que en México se pueden comprar encuestas de opinión con un resultado predeterminado. Aunque la campaña de anuncios contra López Obrador pudo debilitar algo el apoyo con que contaba, es mucho más probable que la mejora de Calderón en las encuestas de opinión se debiera al apoyo de los conservadores del PRI, que se dieron cuenta de que Madrazo no podía ganar y se pasaron al PAN.

### *Abajo y a la izquierda*

¿Cuál fue el efecto de las críticas desde la izquierda a la campaña de López Obrador? En junio de 2005 el subcomandante Marcos había caracterizado el programa de López Obrador como una «continuación» del «liberalismo social del salinismo», afirmando que «la imagen de Carlos Salinas de Gortari construida por el candidato del PRD es, en realidad, un espejo»<sup>10</sup>. Muchos seguidores de López Obrador acusaron a los zapatistas de boicotear al PRD, pero de hecho el EZLN rechazó las propuestas de varias organizaciones de presentar un candidato alternativo o de promover la abstención de los votantes. En sus comunicados urgía repetidamente a sus seguidores a votar según sus deseos o a no votar. A principios de 2006 el EZLN lanzó «La Otra Campaña», un recorrido por los estados del centro y el sur de México en los que Marcos escuchaba las quejas de los mexicanos cuyas necesidades estaban siendo silenciadas por los principales partidos. En febrero, cuando «La Otra Campaña» llegó a las regiones de las *maquiladoras* en el estado de Puebla, era evidente que el movimiento zapatista estaba comenzando a acceder al «nue-

---

<sup>10</sup> Subcomandante insurgente MARCOS, «La (imposible) ¿geometría? del poder en México», *La Jornada* (20 junio 2005).

vo proletariado» de los trabajadores industriales y de los centros de trabajo superexplotadores, planteando la posibilidad, esperaba Marcos, de extender el modelo rural de las expropiaciones colectivas de tierras, desarrolladas por los zapatistas indígenas en Chiapas, convirtiéndolas en «expropiaciones de los medios de producción» en el sector industrial.

Más que perjudicar al candidato del PRD, los esfuerzos de «La Otra Campaña» por construir una alternativa fuera del terreno electoral le proporcionaron una guía clara. A primeros de mayo el apoyo a López Obrador iba creciendo de nuevo, reforzado por el rechazo popular a las brutalidades de la policía en Texcoco y San Salvador Atenco, no lejos de Ciudad de México; el mismo Atenco que humilló al gobierno de Fox en 2002 impidiendo la construcción de un aeropuerto internacional. El 3 de mayo de 2006, cuando la policía intentó expulsar violentamente a los vendedores de flores del mercado de la ciudad de Texcoco, un grupo de Atenco vino en su ayuda y expulsó en una batalla campal a la policía. Pasadas unas horas, ésta regresó con cientos de refuerzos del Estado y federales, iniciándose una refriega por el control de la autopista que conecta ambas ciudades, retransmitida en vivo –gracias a la filmación desde un helicóptero de tráfico– por la televisión nacional. La policía disparó y mató a un chico de catorce años, Javier Cortés, pero perdió la batalla por la autopista. Al amanecer del día siguiente, 3.500 policías federales y del Estado irrumpieron en Atenco y la registraron casa por casa, golpeando y magullando a sus habitantes. También detuvieron a docenas de seguidores de «La Otra Campaña» que habían llegado allí la noche antes, tras suspender su gira en respuesta a la «alerta roja» proclamada por Marcos. Fueron detenidas un total de 217 personas. Alexis Benhumea, un estudiante de veinte años de Ciudad de México, fue fatalmente herido por una lata de gas lacrimógeno que le golpeó en la cabeza; murió pocas semanas después. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez informó de que la policía había violado y torturado sexualmente a 27 de las 43 mujeres detenidas. En los siguientes días y semanas, los testimonios de esas mujeres y de los testigos de sus violaciones trajeron terribles recuerdos de represiones pasadas.

Aquél fue un momento decisivo para Calderón, cuyas sarcásticas declaraciones sobre Atenco revelaron una propensión autoritaria que hasta aquel momento había conseguido ocultar. Justificó los ataques de la policía y descartó los informes de violaciones como «infundados». En el subsiguiente debate presidencial prometió expresamente mantener la «mano dura» contra los *macheteros* sin ley de Atenco. López Obrador no llegó a replicar en relación a esto a su rival, pero una consecuencia no pretendida de la ruda forma de hablar de Calderón fue convencer a muchos votantes hasta entonces no muy entusiasmados con López Obrador o el PRD de la conveniencia de votar por él contra aquél, que finalmente había mostrado los dientes.

Los militantes de Atenco y sus machetes formaban parte de «La Otra Campaña» desde su inicio en 2005, viajando por el país con Marcos para explicar cómo habían derrotado al Estado en 2002. Otra región donde estalló la



rebelión desde abajo durante la campaña presidencial fue el estado con mayoría indígena de Oaxaca. En la capital del estado del mismo nombre, a seis horas de distancia en automóvil de Ciudad de México, una larga huelga de los maestros ha ido creciendo desde mayo de 2006 hasta convertirse en una confrontación con el autoritario gobernador del estado Ulises Ruiz Ortiz –del PRI–, por parte de una coalición de más de noventa organizaciones obreras y movimientos sociales conocida como Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). Cuando «La Otra» visitó Oaxaca en febrero de 2006, Marcos pidió a los sindicatos de maestros y otros movimientos que unieran sus fuerzas y comenzaran a hablarse –y escucharse– mutuamente. La polinización cruzada entre los movimientos tuvo fruto tres meses después. Los maestros en huelga –acampados durante el verano en el centro histórico de Oaxaca– recibieron el apoyo de las organizaciones indígenas y grupos de izquierda.

El 14 de junio el gobernador envió a tres mil policías antidisturbios en un intento de desalojar a los 15.000 acampados, pero se vieron obligados a retirarse tras tres horas de combate cuerpo a cuerpo. Lo que el Estado esperaba liquidar como en Atenco dio un nuevo giro. Los maestros radicalizaron su actitud y cedieron el control de la huelga a la APPO, que convirtió la dimisión de Ruiz en la reivindicación central. La APPO se apoderó del canal de televisión estatal y comenzó a emitir. Cuando el 21 de agosto escuadrones paramilitares respaldados por el gobernador destruyeron las antenas y el transmisor de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, la APPO decidió ocupar las emisoras de radio privadas, desde las que siguieron emitiendo. En el momento de escribir esta crónica, la situación sigue siendo tensa, con detenciones esporádicas de líderes sociales y paramilitares vestidos de civil que disparan contra los rebeldes. Dos miembros de la APPO han sido asesinados. El gobernador ha sido declarado persona non grata en varias localidades del estado, incluida su ciudad natal, y su administración está siendo expulsada de los edificios estatales. El 21 de septiembre de 2006 una caravana con cinco mil participantes salió de Oaxaca en dirección a Ciudad de México para plantear sus reivindicaciones ante la nación\*.

A finales de junio de 2006 López Obrador canceló la parada que su gira de campaña debía hacer en Oaxaca; pero pese a la distancia que mantuvo con el conflicto, fue el claro beneficiario del voto de castigo emitido allí contra el PRI y el PAN, superando la maquinaria política del gobernador. Las luchas de este año en Oaxaca, como las de San Salvador Atenco, Chiapas y otros lugares, no han perjudicado, como se quejaron en su momento algunos intelectuales favorables al PRD, la campaña de su candidato. Por el contrario, en la mayoría de esos estados –como en el total de los veinte por los que ha pasado «La Otra Campaña»– el PRD obtuvo sus mayores victorias (y en muchos casos las primeras) en la historia del partido, incluso según el fraudulento recuento oficial. Allí donde las rebeliones desde abajo fueron golpeadas dura-

---

\* El martes 10 de octubre la marcha llegó a Ciudad de México, donde fue recibida entusiastamente. [N. del T.].

mente por la represión gubernamental, el efecto bumerán electoral contra el régimen incrementó los resultados de López Obrador.

Las elecciones de 2006 en México no han hecho más que exacerbar las profundas fracturas sociales del país. Los seguidores de López Obrador que depositaban su confianza en las urnas han visto sus votos literalmente arrojados a la basura por el IFE, guardián oficial del recuento, con el respaldo del TRIFE, el garante constitucional de la «democracia» mexicana. Su indignación podría aumentar a medida que las consecuencias del fraude electoral se conviertan en política gubernamental. Millones de mexicanos han perdido cualquier esperanza de cambio por la vía institucional o electoral. Luchas como las de Oaxaca, Atenco y «La Otra Campaña» comienzan a parecerles a muchos más pragmáticas que la participación en elecciones amañadas.

### *Balance y perspectivas*

¿Cómo está ahora el equilibrio de fuerzas? López Obrador es una figura verbalmente más combativa que Cárdenas, y, a diferencia de éste, se ha negado a negociar con su rival oficialmente ratificado; pero su retórica y sus movilizaciones, destinadas a evitar la repetición de lo sucedido en 1988, han producido sustancialmente el mismo resultado. Del mismo modo que Cárdenas se negaba a apoderarse del Palacio Nacional en 1988, López Obrador dejó pasar el momento decisivo en los días inmediatamente posteriores al 2 de julio, cuando, en lugar de encabezar a los votantes encolerizados en una ofensiva directa contra las corruptas autoridades electorales —rodeando los edificios del IFE y el TRIFE y negándose a dejar salir a los funcionarios hasta que hubieran aprobado el recuento completo que prevé la Constitución—, Obrador estableció un ritmo espasmódico más burocrático: una manifestación el 8 de julio, otra el 16 de julio y luego el campamento en el Zócalo, que el TRIFE pudo ignorar impunemente. Ésta fue la vía que condujo al sumiso desmantelamiento del campamento que ocupaba cerca de ocho kilómetros en el Paseo de la Reforma el 15 de septiembre, despejando el camino para la muestra de fuerza del Estado en el desfile militar del Día de la Independencia, el 16 de septiembre.

López Obrador se ha visto debilitado también por las deserciones en el PRD. Cárdenas lo atacó primero por contratar como asesores a muchos de los autores del fraude de 1988, y luego, el 18 de septiembre, calificó la conducta de López Obrador como «perjudicial para toda la izquierda mexicana», insistiendo en que «hay que respetar las instituciones»<sup>11</sup>. Entre esas instituciones está la comisión para el bicentenario de la Declaración de Independencia de México, que el propio Cárdenas preside por nombramiento de Fox, lo que llevó a Marcos y Muñoz Ledo a motejarlo de

<sup>11</sup> «Carta enviada por Cuauhtémoc Cárdenas a Elena Poniatowska», *El Universal* (14 septiembre 2006) y «Un grave error, nombramiento de AMLO: Cárdenas», *El Universal* (18 septiembre 2006).

«empleado» del presidente. El 11 de septiembre los gobernadores del PRD de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán y Zacatecas declararon públicamente que su mandato constitucional estaba por encima de la lealtad al partido; Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, anunció que respetaría el veredicto del TRIFE y colaboraría con Calderón.

El PRD está muy dividido por las luchas entre facciones y está por ver cuántos de sus nuevos senadores y diputados mantienen el espíritu y la unidad del 1 de septiembre. A medida que se disipan las movilizaciones populares, es muy posible que los legisladores del PRD se decidan por desempeñar el papel de oposición leal. Actualmente tienen una representación mayor que nunca en el Congreso y seis gobernadores de los distintos estados, número que puede aumentar a siete si las nuevas elecciones de octubre en Tabasco les van bien; aunque, si el pasado sirve como antecedente, podría muy bien suceder que, al igual que en 1988, el éxito del fraude electoral a escala nacional alentara los intentos de hacer lo mismo en ese estado. En cualquier caso, López Obrador mantiene un amplio apoyo en la gigantesca capital, donde con un 68 por 100 de participación de los 11 millones de votantes del Distrito Federal obtuvo el 58 por 100 de los votos, frente al 27 por 100 para Calderón. Una enorme multitud acudió a su Convención Nacional Democrática celebrada en el Zócalo el 16 de septiembre, donde anunció su intención de formar un gobierno paralelo, «para emprender el camino para la construcción de una nueva República» (*sic*).

### Resultado de las elecciones al Parlamento mexicano, 2000-2006

Senado (128 escaños)

	2000	2006	Cambio
PAN	47	52	+5
PRI	59	33	-26
PRD	16	29	+13
Otros	6	14	+8

Cámara de Diputados (500 escaños)

	2000	2003	2006	Cambio, 2000-2006
PAN	207	148	206	-1
PRI	208	201	106	-102
PRD	53	97	127	+74
Otros	32	54	61	+29

Fuente: [www.senado.gob.mx](http://www.senado.gob.mx) y [www.diputados.gob.mx](http://www.diputados.gob.mx)

Por otra parte, Calderón será uno de los presidentes mexicanos más débiles al ocupar el cargo. Tiene ante sí una economía relativamente estancada, y tendrá que moderar su agenda liberalizadora si quiere evitar nuevas protestas. Su legitimidad como líder nacional es aún más endeble que la de Salinas. Rechazado en las urnas por el sur mexicano, y muy probablemente ayudado por diversos fraudes en sus victorias en muchas zonas

del norte, está por ver en qué medida es capaz de imponer su voluntad. A escala local sigue en pie gran parte de la vieja maquinaria del PRI, que además conserva 17 de los 32 gobernadores estatales. Y aunque las elecciones de 2006 confirman el debilitamiento del PRI a escala federal –su representación en la Cámara Baja ha quedado reducida a la mitad desde 2000, de 208 escaños a 106, y en la Cámara Alta de 59 a 33–, Calderón seguirá dependiendo de sus votos en el Congreso. Las elecciones de 2006 han mostrado sobre todo que, pese a la continua descomposición del PRI, la cultura política tradicional de la elite mexicana –fraudes, acuerdos encubiertos, caciquismo local, recurso a la represión armada– está todavía muy arraigada.

Sigue siendo igualmente dudoso hasta cuándo permanecerá López Obrador en el centro de la escena. La suya no es la única revuelta que estremece el país del águila y la serpiente. «La Otra Campaña» sigue adelante independientemente del ciclo electoral, y otras fuerzas no electorales pueden desempeñar un papel importante: los movimientos sociales de Oaxaca bloquearon con éxito durante semanas la autopista panamericana como parte de su campaña para hacer dimitir al gobernador del PRI. Si llegan a producirse acciones simultáneas en los estados contiguos de Veracruz, Puebla y Chiapas, el flujo de alimentos, petróleo y otros productos desde el fértil sur hacia el árido norte se vería en dificultades. El 13 de septiembre grupos rebeldes bloquearon simbólicamente parte de esas carreteras y se manifestaron también en Hidalgo, San Luis Potosí y Ciudad de México, en solidaridad con la APPO. Al igual que Bolivia, México cuenta con pocas autopistas que conecten el norte con el sur, y una estrategia coordinada como la desplegada en los Andes podría tener un efecto parecidamente paralizador. López Obrador, aunque cuenta con suficientes fuerzas dispuestas a ello, no se ha decidido hasta el momento a emplear tales tácticas. Si sus cálculos se limitan a mantener suficiente capacidad de liderazgo en el PRD para obtener la nominación presidencial en 2012, sin ninguna forma de garantizar a sus seguidores que sus votos no volverán a ser simplemente desdeñados, éstos podrían verse tentados a tomar el asunto en sus propias manos y unir sus fuerzas con sectores más decididos de la izquierda mexicana.

En este contexto, el 28 de septiembre los comandantes indígenas del EZLN partieron de Chiapas para unirse a la lucha por liberar a los presos políticos de Atenco, mientras Marcos reanudaba la gira de «La Otra Campaña» por los doce estados más septentrionales del país. «La Otra» planea realizar asambleas en Tijuana y Ciudad Juárez con los emigrantes mexicanos, cada vez más movilizados, y chicanos de Estados Unidos. En su avance hacia el muro levantado a lo largo de la frontera, es probable que la «otra» izquierda revele que el norte de México, la tierra de Pancho Villa, no es la base conservadora calderonista que pretenden los medios oficialistas. A principios de 2007 más comandantes zapatistas se desplegarán –de dos en dos– por los treinta y dos estados mexicanos, con la intención de promover la organización de «la rebelión nacional contra el sistema ca-

pitalista» que «La Otra Campaña» pretende detonar. El IFE, el TRIFE y otras instituciones desacreditadas responsables del fraude electoral de 2006 no podrán desempeñar entonces ningún papel ni amañar su resultado.

*29 de septiembre de 2006*